SCHOLARS
STRATEGY NETWORK

Poner fin al Título 42 es lo más responsable, esto es lo que la administración debe hacer a continuación

Daniel F. López-Cevallos, University of Massachusetts-Amherst

Con la fecha límite para poner fin al Título 42 acercándose rápidamente el 11 de mayo, la administración Biden está considerando varios enfoques para gestionar el aumento potencial de los cruces de inmigrantes en la frontera sur. El reciente incendio mortal en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez (al otro lado de la frontera con El Paso, Texas), en el que perdieron la vida casi 40 migrantes de América Central y del Sur, destaca la necesidad de una estrategia bien pensada y humana para llenar el vacío político dejado por el Título 42.

Como parte de los esfuerzos de la administración Biden para abordar los impactos potenciales, la administración debe incorporar un enfoque de salud pública para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos estadounidenses. Eso significa poner la salud de los migrantes en el centro del debate sobre la inmigración y avanzar desde allí a todo el gobierno federal, abordando los factores socioeconómicos, los sistemas institucionales y las políticas que afectan la salud de los inmigrantes.

Tal como está, demasiada retórica y política de inmigración es en respuesta a una imagen distópica distorsionada que tiene EE. UU. sobre la situación en la frontera con México. Una encuesta del otoño pasado sugirió que más de la mitad de los estadounidenses dicen que es algo o completamente cierto que Estados Unidos está "experimentando una invasión" en la frontera sur. Centrarse en la cantidad de "encuentros" (es decir, detenciones y expulsiones) solo en la frontera entre EE. UU. y México pasa por alto la realidad de la naturaleza cada vez más global de los flujos migratorios a través de nuestra frontera sur, más allá de México y el norte de Centroamérica. De hecho, el año pasado vimos un número creciente de migrantes de otras partes de las Américas (Venezuela, Cuba, Nicaragua) y de todo el mundo (Ucrania, India, Turquía).

También es importante tener en cuenta que casi la mitad de la población no autorizada en los EE. UU. ingresó legalmente al país y luego se quedó más tiempo que su visa. Si bien las autoridades de inmigración reportaron casi 2,4 millones de detenciones y expulsiones en 2022, esta cifra palidece en comparación con los más de 160 millones de personas que cruzaron nuestra frontera sur (en autobuses, trenes o vehículos personales) hacia los EE. UU. sin ningún problema ese mismo año. La realidad interconectada de la migración transnacional desde América Latina y otros países del mundo hacia los Estados Unidos requiere esfuerzos más amplios que aborden las condiciones en todo el hemisferio.

A la luz de esta realidad, EE. UU. debe mantener su compromiso histórico de mantener unidas a las familias inmigrantes y apoyarlas como una unidad a lo largo de nuestros procesos de inmigración. La administración Biden debe resistir la tentación de utilizar la detención de migrantes, las prohibiciones de tránsito o las deportaciones aceleradas como las principales herramientas de política, y más bien basarse en sus primeros éxitos ofreciendo opciones legales para los migrantes, como nuevos procesos de libertad condicional y formas ampliadas de programar citas en los puertos de entrada. Tanto la declaración de Los Ángeles como el plan Menéndez pueden guiar sus esfuerzos.

Un enfoque de salud pública también implica apoyar a las autoridades de inmigración para que aumenten su capacidad de hacer frente a una mayor carga de trabajo, haciéndolo en colaboración con sus homólogos en los países de origen de inmigrantes y apoyando a las organizaciones comunitarias en ambos lados de la frontera.

Dada la mayor presión sobre nuestro sistema de inmigración, se necesita más capacidad para garantizar que las familias y los niños no acompañados no sean retenidos en instalaciones que no cumplan ni siquiera con los estándares de atención más básicos. Mientras tanto, al trabajar en colaboración con otros países para

abordar las causas profundas de la migración (como la pobreza, la violencia y los desastres naturales) e invertir en países y comunidades para abordar las necesidades básicas (como vivienda y atención médica), no solo puede la administración mejorar la vida en todo el hemisferio, sino también reducir el ritmo de la migración. Y reforzar las inversiones en organizaciones comunitarias, en las que es más probable que los migrantes confíen, servirá como un pilar complementario para mantener los servicios de atención para los migrantes mientras hacen su viaje a través de las comunidades fronterizas.

Finalmente, debemos trasladar las cargas de nuestro fallido sistema de inmigración de las espaldas de los inmigrantes y las comunidades fronterizas empobrecidas a las autoridades federales y estatales. El estatus quo está obligando a los migrantes (que necesitan protección o mejores perspectivas económicas y que pueden contribuir en gran medida a las comunidades estadounidenses) a emprender un viaje peligroso, plagado de crimen organizado y funcionarios corruptos. En cambio, nuestro enfoque debe guiarse por el compromiso inequívoco de las naciones de defender el derecho a solicitar asilo y volver a comprometerse a ampliar las vías legales para los migrantes y solicitantes de asilo.

La administración Biden tiene razón al buscar el fin del Título 42 y las medidas relacionadas promulgadas por la administración anterior. Pero al hacerlo, debemos volver a comprometernos con un sistema más humano y expansivo de opciones legales para los migrantes en todos los puertos de entrada de EE. UU., incluida la frontera sur. Tal enfoque tendría enormes beneficios para todos los estadounidenses, tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, y aumentaría la confianza en los líderes federales y estatales. Con el mismo compromiso firme que tuvieron con la vacunación contra el COVID, la administración Biden debe alinear sus decisiones de inmigración con el compromiso de nuestra nación de proteger la salud de todos, y eso incluye a los migrantes y sus familias.

Daniel López-Cevallos es Profesor en el Departamento de Políticas y Promoción de la Salud de la Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts, Amherst.